

Hacia el Octavo Congreso Nacional de Delegados de la CTA

En camino hacia la Paritaria y la Constituyente Social

Cuando en diciembre del 2005 se le ponía la lápida al ALCA en la Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata con la presencia insoslayable de nuestra Central, estábamos ante un momento de condensación de un largo período de resistencia del movimiento popular que en América Latina puso en crisis el Consenso de Washington asumido como la Biblia de gobierno durante más de 20 años. El Foro Social Mundial de Porto Alegre como parte del movimiento antiglobalización fue un lugar de encuentro y potenciación del proceso, del que también participamos.

A nivel de la situación interna de los países de América del Sur, en los últimos tiempos, afloran nuevas tensiones que tienen que ver con distintos factores, entre ellos un fuerte reagrupamiento de la derecha económica y las propias debilidades político-organizativas del campo popular.

El gobierno emergente de la crisis del 2001 encarnó un proceso sumamente contradictorio con continuidades y rupturas en lo económico social y un mejoramiento de las condiciones de pobreza extrema, pero con grandes falencias a la hora de propiciar las medidas político institucionales que permitan avanzar en las profundas transformaciones estructurales que requiere la etapa.

El crecimiento económico sin modificación del modelo productivo ni de la matriz de distribución, mantiene los condicionamientos estructurales que sostienen la desigualdad pero genera nuevas condiciones para la pelea. Vamos pasando de las luchas defensivas contra los recortes, contra los congelamientos presupuestarios, etc. a los conflictos que ubican como eje el mejoramiento salarial y la registración laboral.

Tanto las tasas de ganancia empresarial en aumento, como el superávit fiscal, acompañado de una baja de la tasa de desempleo impulsan esta nueva dinámica social.

Gran cantidad de esas luchas salariales han sido conducidas por las organizaciones de nuestra Central, logrando horadar los techos con que se pretendía acotar las demandas de recomposición. Por otra parte se han puesto en marcha una gran cantidad de procesos de lucha que tienen que ver con la inclusión de sectores de trabajo que fueron tercerizados para abaratar el costo laboral y que hoy pujan por el encuadre en el gremio principal de la actividad.

Muchos jóvenes que se incorporan por primera vez al mundo del trabajo comienzan a participar de estos procesos y lo hacen sin experiencia anterior e incluso sin haberles sido transmitido la experiencia por la generación anterior. Es en este sentido que cobra la mayor relevancia la obtención de la Personería Gremial de la Central y la pelea por la libertad y la democracia sindical que permitirá incluir a estos trabajadores en nuevas organizaciones sindicales y/o transformar las existentes.

Los movimientos sociales territoriales nacidos al calor de la resistencia y a la necesidad de generar estrategias de supervivencia en los momentos en que la tasa de desempleo llegaba al 24 % y el índice de pobreza superaba el 60 %, hoy se plantean nuevas tareas y nuevos desafíos.

La organización territorial está llamada a jugar un papel clave en la construcción de nuevas correlaciones de fuerzas que nos permitan al mismo tiempo incidir en las políticas públicas que garanticen a nuestro pueblo acceder a los derechos económicos, sociales y culturales y generar la masa crítica que entramada con las organizaciones sindicales de la Central y con un conjunto muy amplio de organizaciones por fuera de ella, nos permita avanzar en construir los instrumentos organizativos para profundizar la disputa por la distribución de la riqueza.

Un año bisagra

En este contexto, los debates que vamos a iniciar con miras al Congreso Nacional del 4 y 5 de diciembre próximo, nos plantean nuevos desafíos a resolver pero que se dan en una situación de avance del movimiento popular. Hay que decir también que este próximo Congreso abrirá una instancia inédita ya que será la primera vez que sesionarán los 502 delegados y delegadas de todo el territorio nacional, estos representantes elegidos a través del voto directo, serán los portadores de los mandatos de los congresos provinciales de

la Central en las que participarán más de 6.500 delegados de todas las provincias.

Pero la circunstancia en que nos convocaremos será también muy especial. En una suerte de momento bisagra, ya que estaremos a punto de cumplir los primeros doce meses de mandato en los que nuestra Central se sigue reafirmando en su voluntad histórica de constituirse en la herramienta de lucha de la clase trabajadora. Todo un desafío que pone a prueba día a día la solidez de la construcción de nuestra Central, que va ganando reconocimiento como expresión de un sindicalismo democrático, en el que el proyecto político y la voluntad colectiva son su principal sustento.

Llegaremos a este Congreso tras transitar un año en el que se dieron importantes luchas y que tuvo también momentos turbulentos. El que más nos conmocionó, sin duda, fue el asesinato de Carlos Fuentealba, brutal demostración de hasta dónde son capaces de llegar los cultores de la criminalización de la protesta social. Fue una de esas situaciones en las que se pone a prueba la solidez y el temple de nuestra militancia que, una vez más, estuvo a la altura de las circunstancias. En cuestión de horas la CTA se situó en el centro de la convocatoria que permitió nacionalizar una masiva respuesta popular, nueva demostración de que la clase trabajadora sigue siendo el principal reaseguro ante los nostálgicos del autoritarismo.

De manera coincidente estaremos iniciando nuestro Congreso, en la primera semana de diciembre, en un tiempo que también será bisagra en relación con el proceso político de nuestro país. El epílogo del gobierno nacional, que con sus más y con sus menos, integró el mapa político regional de esta nueva etapa histórica, caracterizada por la ruptura con la subordinación automática a los dictados del Consenso de Washington, marca un punto de inflexión a partir del cual se intensificará la tensión entre dos campos de fuerzas que pugnan en sentido contrario.

De un lado, los que pretenden abortar cualquier posibilidad de profundizar las transformaciones que demandan los trabajadores y los sectores populares, cuya resistencia puso en crisis a las fuerzas políticas tradicionales que representan los intereses de los factores de poder. Del otro, los que sabemos que si en Argentina y en la región no se avanza en la construcción de nuevas correlaciones de fuerza que fortalezcan la posición de las expresiones identificadas con la democracia, la justicia social y la autonomía nacional, inexorablemente estaremos ante el inicio de la cuenta regresiva de una etapa

de restauración de la gobernabilidad en la versión más ortodoxa del neoliberalismo. Pero hay que señalar que esa pugna entre quienes apuestan a profundizar los cambios y los que empujan para volver a un esquema que se allane a los intereses de los factores de poder, se da hacia adentro del oficialismo y hacia adentro, también, del archipiélago de expresiones heterogéneas que conforman la oposición.

Por supuesto, el núcleo duro de los que pretenden un viraje de lleno hacia la ortodoxia neoliberal lo constituye el sector más poderoso del empresariado. El viernes 24 de agosto, apenas 4 días antes de la marcha en que con más de 20.000 concurrentes reclamáramos la Paritaria Social para la Distribución de la Riqueza, se publicaba en Clarín la información acerca de las medidas que, sin demoras, deberá tomar el próximo gobierno según lo demanda la cúpula empresaria de la industria y las finanzas. El paquete de “correcciones” contiene cuestiones tales como acuerdo de precios y salarios cada dos años, plan antiinflacionario basado en contención del gasto público y disciplina fiscal, es decir, la vieja receta del congelamiento presupuestario y salarial del sector público, aumento tarifario, acuerdo por la deuda con el Club de París, restitución de las relaciones (¿las carnales?) con el Grupo de los 7 y hasta se llega al descaro de reclamar el “fin de la puja externa pendiente con los bonistas y así normalizar el sensible cuadro externo”. En suma, la restauración neoliberal en toda la línea, fondos buitres incluidos. De más está decir que si esa fuera la estrategia económica de un próximo gobierno, se desandaría en un tris lo poco que pudimos recuperar los asalariados y, en un breve lapso de tiempo, veríamos expandirse otra vez las cifras de pobreza e indigencia, que dicho sea de paso, aún en sus atemperados niveles actuales hablan de una sociedad con grandes brechas de desigualdad.

Esto muestra a las claras que “los factores de poder que desmantelaron el aparato productivo durante la década del 90 y se beneficiaron con la privatización de las empresas públicas, siguen pugnando por mantener sus privilegios e incrementar sus cuantiosas ganancias”. Y está claro también, que agitan el fantasma de las tensiones incontrolables que desataría la puja distributiva, como así también el riesgo de contrariar a los poderosos del mundo con la persistencia en las malas compañías de Chávez y otros vecinos pobres, pues añoran los tiempos en que el rumbo del país lo definía un puñado de tecnócratas empleados del FMI y de las grandes corporaciones.

Lo cierto es que a nuestra Central, a la que alguna vez se le reconocerá el papel histórico que ha desempeñado como uno de las expresiones que más contribuyó a la democratización de nuestra sociedad, le cabe en esta próxima etapa que plantea grandes interrogantes, un papel no menos importante como factor capaz de articular un amplísimo espectro de fuerzas del campo popular en la disputa por la profundización de un nuevo tiempo político, signado por el

avance en la justa distribución de la riqueza y la vigencia plena de los derechos humanos en su sentido más amplio.

“Para ello hacen falta políticas públicas que incidan en el reparto de la torta en beneficio de los que menos tienen. Este es el camino indispensable para garantizar la justicia social y, al mismo tiempo, fortalecer el mercado interno como plataforma de un modelo distributivo que nos permita construir una Argentina más igualitaria, más democrática y que recupere a pleno su autonomía nacional”.

En ese camino, la lucha por la democratización del movimiento sindical y la obtención de la Personería Gremial para la CTA, constituyen cuestiones estratégicas habida cuenta de que es necesario garantizar las mejores condiciones de legalidad para rodear de garantías democráticas a aquellos que van a jugar el papel más dinámico en la lucha por elevar el ingreso y las condiciones de vida de los que, en términos de poder real, constituimos el eslabón más débil de la cadena.

Junto con esto, la unidad del campo popular en su máxima expresión posible, constituye la otra condición imprescindible para asegurar un proceso ascendente en términos de desarrollo de poder territorial y capacidad de movilización. En este sentido a la CTA le cabe un papel clave ya que, hoy por hoy, aparece como el único espacio organizativo capaz de contener a la diversidad de expresiones que, más allá de sus diferencias, comparten la necesidad de profundizar el protagonismo de los trabajadores como principal reaseguro de una dinámica de transformación. La experiencia reciente en torno a la puesta en marcha de la convocatoria a la Paritaria Social, entendida no como algo estático sino como un proceso movilizador de formulación y conquista de demandas, nos permitió tejer un entramado de expresiones multisectoriales y de fuerzas sociales y territoriales que en esta nueva etapa deberemos ir ampliando y extendiendo a todo el país, apuntando a consolidar una articulación de organizaciones que incida con poder de gravitación propio en la definición de la agenda social que sea la expresión de un tiempo político de avance del campo popular.

Para poder progresar en ese rumbo, hay una dimensión estratégica de la disputa que es la que se libra en el terreno de las ideas. Hasta ahora hemos logrado articular un mensaje coherente que nos ha dado un importante grado de legitimidad a los ojos de la mayoría de nuestro pueblo, con el que compensamos, en parte, otros flancos débiles que aún tenemos. Pero el atributo de la coherencia, si no va acompañado de la capacidad de generar adhesión activa, termina siendo insuficiente.

La plataforma de políticas que los grupos de poder lograron instalar mediáticamente como lo nuevo y exitoso en los 90, hoy carece de consenso. Fundamentalmente, porque sus políticas acarrearán más padecimientos y mayor retroceso social para la mayoría. Después del estallido del 2001, en que salta en pedazos el fundamentalismo neoliberal en su versión local, la principal limitación de los dueños del poder económico y de sus gestores políticos es que no pueden explicar en detalle los intereses que defienden, puesto que si lo hicieran jamás podrían ganar de nuevo una elección. Pero sí lo que logran con suma eficacia es convencer a las mayorías de que es imposible cambiar lo que ellos llaman el orden natural de las cosas. Como no pueden ya, a su entero pesar, mostrar a Bush o a Uribe como paladines de la libertad y la democracia, optan por el recurso de ridiculizar a Chávez o enlodar a Lula. Más que ganar adhesión, les basta con generar inmovilismo. Ya sea por escepticismo o por indiferencia. Ellos dicen, ASI SON LAS COSAS Y NO SE VAN A CAMBIAR. Nosotros tenemos que demostrar que ASI ESTAN LAS COSAS Y LAS DEBEMOS CAMBIAR. Y ahí está la clave. En nuestra capacidad material y discursiva de construir consenso social en torno a nuestras ideas, en las que prevalece el interés colectivo por sobre la lógica del individualismo exacerbado del discurso hegemónico.

Esto último es clave y, quizás, lo más difícil de lograr ya que se trata de construir un nuevo sentido común en el que no haya margen de tolerancia ante los padecimientos de los que sufren la injusticia social en sus distintas formas. El aislamiento político equivale a respirar gas venenoso para el movimiento popular. Toda lucha, por justa que sea, en condiciones de aislamiento tiene como destino la derrota o su hibridación en la lógica corporativa. Esto lo dominan a la perfección los grupos de poder que detentando la propiedad de los grandes medios de comunicación masiva, han desarrollado una enorme capacidad de convertir en sentido común sus ideas y sus propios intereses. En este plano la disputa sigue siendo desproporcionadamente desigual. Por ello las iniciativas vinculadas a la Comunicación y a la Formación Política tienen que seguir estando como temas recurrentes en nuestros debates, más allá de los ejes del Congreso que tienen que ver con las definiciones frente a los tres ejes políticos de este momento. A saber, la Paritaria Social, la Constituyente Social y el proceso de unidad del movimiento sindical a escala mundial y continental

Hoy reviste particular importancia el hecho de que los debates y las resoluciones vayan surgiendo de cada barrio, de cada centro de trabajo, de cada territorio. Esto es imprescindible para que la Paritaria Social y la Constituyente Social vayan siendo una construcción impregnada de la realidad y las necesidades concretas de los distintos colectivos sociales. Si logramos esto, la experiencia de articulación del Movimiento Político, Social y Cultural puede llegar a ser un proceso vivo, que abra las puertas de una experiencia

inédita y a la vez imprescindible para el campo popular, como lo sería poder empezar a plasmar un instrumento de acumulación política propio invirtiendo las lógicas cerradas que hasta ahora siempre fueron inconducentes.

Compañeros y compañeras de la CTA, como militantes del campo popular percibimos que se avecinan tiempos de definiciones. Tiempos que pueden trazar los caminos a recorrer para abrir una etapa de democracia más participativa, en los que el protagonismo de las organizaciones populares incida de manera creciente en la definición de las políticas públicas. Pero dependerá en gran medida de nosotros mismos, de nuestro crecimiento organizativo y de nuestra capacidad de incidir con iniciativa política y poder de movilización, que ello sea posible.

En todo caso, sabemos que no se trata de esperar que los cambios sucedan por sí solos. Más aún, sabemos por la propia historia de nuestra clase, que los cambios en los que no tenemos incidencia los trabajadores terminan siendo siempre para beneficio de una minoría. Los debates que iniciamos con miras a los congresos provinciales que resolverán los mandatos para las deliberaciones del 4 y 5 de diciembre, nos tienen que servir para preparar el bagaje de definiciones que nos permita lograr el máximo de avance en esta etapa.

18 de septiembre de 2007